



El caso Mayan Palace como hito metodológico en el derecho mexicano / The Mayan Palace Case as a Methodological Landmark in Mexican Law

Marco Antonio Gonzalez Reynoso¹

La sentencia del Amparo Directo 31/2013, relacionada con el Amparo Directo 30/2013, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 26 de febrero de 2014, constituye uno de los hitos fundacionales del derecho mexicano de la responsabilidad civil contemporánea. Su importancia se mide en al menos cinco planos.

En el plano dogmático, el fallo articuló por primera vez en la jurisprudencia mexicana una arquitectura sistemática de los factores de cuantificación del daño moral, ordenando los seis elementos del artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal — derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica del responsable, situación económica de la víctima, demás circunstancias del caso y capacidad económica del responsable — en una matriz con modulación cualitativa leve, medio o alto que ha sido posteriormente convertida en estándar por la propia Suprema Corte.

En el plano comparado, el fallo introdujo en el sistema mexicano la figura del daño punitivo, articulándola sobre la base de la doctrina norteamericana de Owen y la jurisprudencia de la Corte Suprema federal estadounidense — particularmente las sentencias BMW versus Gore de 1996, State Farm versus Campbell de 2003 y Philip Morris versus Williams de 2007 — y sobre la base de la doctrina argentina de Ramón Daniel Pizarro (2004). Esta introducción jurisprudencial — no legislativa — del componente punitivo abrió una línea evolutiva que culmina en la separación expresa del registro digital 2024743 de la undécima época,

The judgment in AD 31/2013, related to AD 30/2013, issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice of the Nation on February 26, 2014, under the authorship of then-Justice Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, constitutes one of the foundational milestones of contemporary Mexican civil liability law. Its significance can be measured across at least five dimensions.

On the dogmatic level, the ruling articulated for the first time in Mexican jurisprudence a systematic architecture of the quantification factors for moral damages, organizing the six elements of Article 1916 of the Civil Code of the Federal District — rights infringed, degree of liability, economic situation of the liable party, economic situation of the victim, other circumstances of the case, and economic capacity of the liable party — into a matrix with qualitative gradations of low, medium, or high, which has subsequently been adopted as a standard by the Supreme Court itself.

On the comparative level, the ruling introduced the figure of punitive damages into the Mexican system, grounding it in Owen's North American doctrine and the jurisprudence of the United States Supreme Court — particularly the decisions in BMW v. Gore (1996), State Farm v. Campbell (2003), and Philip Morris v. Williams (2007) — as well as in the Argentine doctrine of Ramón Daniel Pizarro (2004). This jurisprudential — rather than legislative — introduction of the punitive component opened an evolutionary line that culminated in the express separation established by digital registry 2024743 of the Eleventh Era, under which

¹ Corredor Público No. 80 de la Plaza de la Ciudad de México y Mediador Privado No. 161. Maestro en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Especialista en derecho de los negocios y las empresas, valuación inmobiliaria, empresarial y de daño moral; y diplomado en prevención de lavado de dinero. marco@gonzalezreynoso.com



conforme al cual el daño punitivo es ya pretensión distinta del daño moral.

En el plano técnico, el fallo sentó el criterio de que el cálculo de la capacidad económica del responsable puede efectuarse a partir de hechos notorios — el capital contable de la persona moral, el valor de marca, el patrimonio publicitado — sin necesidad de prueba especialmente solicitada por la parte actora. Esto introdujo en el derecho mexicano un criterio de carga probatoria mucho menos riguroso que el tradicional para datos económicos, congruente con la naturaleza extrapatrimonial del bien jurídico tutelado.

En el plano procesal, el fallo definió los contornos de la limitación non reformatio in peius cuando el quejoso es únicamente la parte demandada — limitación que en el caso concreto operó para impedir que la Suprema Corte aumentara la cifra firme apelada por la actora, dejando el dispositivo en un monto sustantivamente inferior al que la propia Sala consideró técnicamente correcto.

En el plano simbólico, el fallo legitimó la doctrina del quantum severo: la idea de que en daños morales graves la indemnización debe alcanzar magnitudes que efectivamente disuadan a los responsables y reparen a las víctimas, alejándose de las cifras irrisorias que durante décadas caracterizaron la práctica jurisprudencial mexicana.

Doce años de evolución doctrinal y jurisprudencial separan la sentencia de 2014 de la fecha de redacción de esta nota. Entre 2014 y 2026 la Primera Sala de la Suprema Corte ha emitido al menos once jurisprudencias y tesis aisladas que han sistematizado, depurado o expandido la doctrina sentada en Mayan Palace. La doctrina académica nacional ha producido obras de referencia como las de Pavón Vasconcelos, Herrera Gómez, Martínez García de León, Oliveros Barba, Perales Bautista, Medina Villanueva, Alfaro Telpalo y la dupla Muñoz-Vázquez Cabello, todas posteriores al fallo. La doctrina internacional comparada ha avanzado en la incorporación europea de los

punitive damages are now a distinct claim from moral damages.

On the technical level, the ruling established the criterion that the economic capacity of the liable party may be assessed based on notorious facts — the legal entity's book value, brand value, or publicly disclosed assets — without requiring evidence specifically requested by the plaintiff. This introduced into Mexican law a standard of proof considerably less rigorous than the traditional one for economic data, consistent with the non-patrimonial nature of the protected legal interest.

On the procedural level, the ruling defined the contours of the non reformatio in peius limitation when the complainant is solely the defendant — a limitation that in this specific case operated to prevent the Supreme Court from increasing the amount confirmed on appeal by the plaintiff, leaving the operative holding at a figure substantially lower than what the Chamber itself considered technically correct.

On the symbolic level, the ruling legitimized the doctrine of the severe quantum: the idea that in cases of serious moral damages, compensation must reach magnitudes that genuinely deter liable parties and repair victims, departing from the derisory figures that characterized Mexican jurisprudential practice for decades.

Twelve years of doctrinal and jurisprudential evolution separate the 2014 judgment from the date of this note. Between 2014 and 2026, the First Chamber of the Supreme Court has issued at least eleven binding precedents and isolated theses that have systematized, refined, or expanded the doctrine laid down in Mayan Palace. National academic scholarship has produced reference works by Pavón Vasconcelos, Herrera Gómez, Martínez García de León, Oliveros Barba, Perales Bautista, Medina Villanueva, Alfaro Telpalo, and the duo Muñoz-Vázquez Cabello, all published after the ruling. Comparative international scholarship has advanced in the European incorporation of punitive damages — notably the Italian Court of



daños punitivos — particularmente las sentencias de la Corte de Casación italiana de 2007 y 2017 — y en la sofisticación del análisis económico del derecho aplicado a daños morales por autores como Gómez Pomar y Marín García.

Frente a esa evolución, una relectura técnica del caso Mayan Palace permite tres aportaciones distintas. Primero, permite mostrar con un caso paradigmático cómo la evolución del derecho de daños transforma el resultado cuantitativo aunque los hechos permanezcan idénticos: el mismo hecho — electrocución de un joven en las instalaciones de un hotel por contacto con conductor húmedo — produce hoy una cifra de reparación radicalmente distinta. Segundo, permite identificar qué elementos del fallo original siguen siendo doctrinalmente válidos y operativos — la matriz de los seis factores, la modulación cualitativa, el rechazo de la tasación rígida, la unidad de la responsabilidad civil — y cuáles han sido superados — la subsunción del punitivo, el rechazo del proyecto de vida, la categorización del daño como normal, la limitación procesal por non reformatio in peius cuando la víctima no impugnó simultáneamente. Tercero, permite proponer una arquitectura metodológica contemporánea transferible a otros casos análogos.

Adicionalmente, una relectura contemporánea cumple una función pedagógica relevante para la formación de jueces, peritos, valuadores y abogados litigantes. El caso Mayan Palace se enseña ya en las facultades de derecho mexicanas como hito introductorio de la responsabilidad civil moderna. Esta nota aporta a esa enseñanza un análisis comparado que evidencia que el caso no es punto de llegada sino punto de partida: la Suprema Corte abrió en 2014 una línea evolutiva que ha continuado, y que continuará seguramente más allá de 2026.

De una síntesis de los hechos del caso, sintetizados a partir del engrose oficial, se tiene que este tuvo cuatro etapas importantes: la condena en primera instancia civil, de ocho millones de pesos; la segunda instancia civil, con reducción a un millón de pesos; el ejercicio

Cassation decisions of 2007 and 2017 — and in the sophistication of the economic analysis of law applied to moral damages by authors such as Gómez Pomar and Marín García.

Against that backdrop, a technical re-reading of the Mayan Palace case yields three distinct contributions. First, it shows through a paradigmatic case how the evolution of tort law transforms quantitative outcomes even when the facts remain identical: the same event — the electrocution of a young man at a hotel facility upon contact with a wet conductor — produces today a radically different reparation figure. Second, it identifies which elements of the original ruling remain doctrinally valid and operative — the six-factor matrix, the qualitative gradation, the rejection of rigid assessment, the unity of civil liability — and which have been superseded — the subsumption of punitive damages, the rejection of the life project, the categorization of the harm as ordinary, and the procedural limitation by non reformatio in peius when the victim did not simultaneously challenge the ruling. Third, it proposes a contemporary methodological architecture transferable to analogous cases.

Additionally, a contemporary re-reading serves a pedagogically relevant function for the training of judges, expert witnesses, valuers, and trial lawyers. The Mayan Palace case is already taught in Mexican law schools as an introductory landmark of modern civil liability. This note contributes to that teaching a comparative analysis showing that the case is not a point of arrival but a point of departure: the Supreme Court opened in 2014 an evolutionary line that has continued, and will surely continue beyond 2026.

From a synthesis of the facts of the case, drawn from the official court record, the case had four significant stages: the civil first-instance judgment awarding eight million pesos; the civil second instance, which reduced the award to one million pesos; the exercise of the power of



de facultad de atracción y amparo directo ante la Primera Sala de la Suprema Corte; y la resolución firme del Amparo Directo 31/2013, con cifra final de un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos. El recorrido evidencia variaciones cuantitativas considerables que documentan la propia dificultad técnica del problema.

Para su resolución, la Primera Sala aplicó, en sustancia, una metodología compuesta por cinco elementos articulados que conviene detallar uno por uno para evaluar su evolución contemporánea.

El primero de estos elementos fue la matriz de los seis factores del último párrafo del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, vigente a la fecha del fallo. Esos seis factores son: los derechos lesionados; el grado de responsabilidad del responsable; la situación económica del responsable; la situación económica de la víctima; las demás circunstancias del caso; y la capacidad económica del responsable. La Sala calificó cada factor en una escala cualitativa de leve, medio o alto y ponderó los seis factores para construir la cuantía única final. Esta arquitectura matricial es la aportación más perdurable del fallo: la jurisprudencia 1a./J. 109/2023 — registro 2027015 — la convirtió posteriormente en estándar bajo la forma de los nueve lineamientos generales de cuantificación, que recogen y profundizan la lógica original.

Como segundo elemento, la sentencia introdujo expresamente el componente punitivo en el sistema mexicano, citando la doctrina de Owen, la jurisprudencia norteamericana y la doctrina argentina de Pizarro. Sin embargo, no separó el componente compensatorio del componente punitivo: ambos se subsumieron en una cuantía única, indistinguibles entre sí en el dispositivo. Esto contrasta de manera radical con el tratamiento contemporáneo derivado del registro 2024743, conforme al cual el daño punitivo es pretensión distinta del daño moral y exige cuantificación autónoma.

attraction and amparo directo before the First Chamber of the Supreme Court; and the final resolution of Amparo Directo 31/2013, with a final figure of one million two hundred fifty-nine thousand two hundred pesos. This progression reveals considerable quantitative variation, documenting the inherent technical difficulty of the problem.

To resolve the case, the First Chamber applied, in substance, a methodology composed of five articulated elements, each of which deserves detailed examination in order to assess its contemporary evolution.

The first of these elements was the matrix of the six factors set forth in the final paragraph of Article 1916 of the Civil Code for the Federal District, as in force at the time of the ruling. Those six factors are: the rights infringed; the degree of liability of the responsible party; the economic situation of the responsible party; the economic situation of the victim; other circumstances of the case; and the economic capacity of the responsible party. The Chamber rated each factor on a qualitative scale of low, medium, or high, and weighed the six factors together to construct the single final sum. This matrix architecture is the most enduring contribution of the ruling: binding precedent 1a./J. 109/2023 — registry 2027015 — subsequently elevated it to a standard in the form of nine general quantification guidelines, which adopt and deepen the original logic.

As a second element, the judgment expressly introduced the punitive component into the Mexican system, citing Owen's doctrine, North American jurisprudence, and Pizarro's Argentine scholarship. However, it did not separate the compensatory component from the punitive component: both were subsumed into a single amount, indistinguishable from one another in the operative holding. This stands in stark contrast to the contemporary treatment derived from registry 2024743, under which punitive damages are a distinct claim from moral damages and require autonomous quantification.



Como tercer elemento, la Primera Sala admitió que la capacidad económica del responsable se determinara a partir de hechos notorios, particularmente el capital contable de la parte demandada según la información pública de esta. Adoptó la distinción entre capital social y capital contable como criterio técnico de valuación de la capacidad económica real del responsable, anticipando la doctrina que después desarrollaría la jurisprudencia 1a./J. 143/2024 sobre la inconstitucionalidad de los topes.

En cuarto lugar tendremos que la Sala no admitió expresamente la categoría autónoma del daño al proyecto de vida desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el artículo 1° constitucional en su versión reformada en 2011 ya regía, su desarrollo jurisprudencial era todavía incipiente y la Sala optó por subsumir cualquier consideración sobre el proyecto vital truncado en el factor de los derechos lesionados, sin reconocerle autonomía conceptual ni cuantitativa.

Finalmente, se constituyó una limitación procesal de notable impacto cuantitativo: como la única quejosa en el amparo directo fue la parte demandada, la Sala se encontró impedida para aumentar la cifra de un millón de pesos confirmada en apelación, aunque su propia argumentación técnica conducía a una cifra significativamente mayor. La cifra firme quedó en un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos — el millón de la apelación más los gastos funerarios y de traslado por setenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos actualizados por intereses legales — limitada por la propia mecánica del amparo.

La cifra firme del Amparo Directo 31/2013 fue de un millón doscientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos. Esta cifra resultó de la confirmación del millón otorgado en apelación más los conceptos accesorios. El expediente relacionado promovido por la parte actora frente a la misma resolución de apelación, abrió una vía conceptual distinta: la Primera Sala consideró que sin la limitación procesal habría

As a third element, the First Chamber admitted that the economic capacity of the liable party could be determined based on notorious facts, particularly the defendant's book value according to its publicly available information. It adopted the distinction between registered capital and book value as the technical criterion for assessing the real economic capacity of the liable party, anticipating the doctrine later developed by binding precedent 1a./J. 143/2024 on the unconstitutionality of caps.

Fourth, the Chamber did not expressly recognize the autonomous category of damage to the life project developed by the Inter-American Court of Human Rights. Although Article 1 of the Constitution in its 2011 amended version was already in force, its jurisprudential development was still incipient, and the Chamber chose to subsume any consideration of the truncated life project within the factor of rights infringed, without granting it conceptual or quantitative autonomy.

Finally, a procedural limitation of notable quantitative impact was operative: since the sole complainant in the amparo directo was the defendant, the Chamber was precluded from increasing the one-million-peso figure confirmed on appeal, even though its own technical reasoning pointed to a significantly higher figure. The final amount stood at one million two hundred fifty-nine thousand two hundred pesos — the million from the appeal plus funeral and transportation expenses of seventy-seven thousand seven hundred ninety-eight pesos updated by statutory interest — constrained by the very mechanics of the amparo proceeding.

The final figure in Amparo Directo 31/2013 was one million two hundred fifty-nine thousand two hundred pesos. This figure resulted from the confirmation of the million pesos awarded on appeal plus ancillary items. The related proceeding brought by the plaintiff against the same appellate ruling opened a different conceptual avenue: the First Chamber considered that, absent the procedural



podido otorgar hasta treinta millones doscientos cincuenta y nueve mil doscientos pesos, conforme al razonamiento técnico expuesto en la propia sentencia.

Esta brecha entre la cifra firme y la cifra conceptualmente sustentada por la Sala, refleja con claridad las limitaciones procesales de 2014 frente a la solidez de la motivación técnica que la propia Suprema Corte construyó. La diferencia entre lo que el caso valía técnicamente y lo que el caso recibió procesalmente quedó marcada como una herida del sistema reparatorio mexicano que solo la evolución posterior ha venido a paliar.

La aportación histórica del caso Mayan Palace puede sintetizarse en tres planos. En el plano dogmático, el caso introdujo en el sistema mexicano la figura de los daños punitivos por vía jurisprudencial, anticipando una evolución que la legislación todavía no ha consolidado pero que la propia Suprema Corte ha asentado como criterio firme. En el plano metodológico, el caso sentó las bases de la matriz de cuantificación que después se ha sistematizado en los nueve lineamientos del registro 2027015. En el plano simbólico, el caso legitimó la doctrina del quantum severo para daños morales graves, abriendo paso a la posterior declaración de inconstitucionalidad de los topes.

Es por estas tres aportaciones que el caso Mayan Palace merece ser estudiado todavía hoy, doce años después, como punto de inflexión vigente.

Por su parte, la valuación contemporánea del caso Mayan Palace exige integrar tres planos del derecho internacional: el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema universal de Naciones Unidas y la doctrina internacional comparada de los principales sistemas que han desarrollado el derecho de daños morales y punitivos.

Las cinco modalidades de reparación integral consolidadas por la Corte Interamericana en su jurisprudencia constante son: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Estas cinco

limitation, it could have awarded up to thirty million two hundred fifty-nine thousand two hundred pesos, consistent with the technical reasoning set forth in the ruling itself.

This gap between the final figure and the figure technically supported by the Chamber clearly reflects the procedural constraints of 2014 as against the strength of the technical reasoning that the Supreme Court itself constructed. The difference between what the case was technically worth and what the case actually received as a matter of procedure remained as a wound in the Mexican reparation system, one that only subsequent evolution has begun to heal.

The historical contribution of the Mayan Palace case may be summarized across three dimensions. On the dogmatic level, the case introduced punitive damages into the Mexican system through jurisprudential means, anticipating an evolution that legislation has yet to consolidate but that the Supreme Court itself has established as firm precedent. On the methodological level, the case laid the foundations for the quantification matrix later systematized in the nine guidelines of registry 2027015. On the symbolic level, the case legitimized the severe quantum doctrine for serious moral damages, paving the way for the subsequent declaration of unconstitutionality of caps.

It is for these three contributions that the Mayan Palace case merits study still today, twelve years later, as a still-relevant inflection point.

For its part, a contemporary valuation of the Mayan Palace case requires integrating three levels of international law: the inter-American human rights system, the universal United Nations system, and the comparative international doctrine of the principal legal systems that have developed the law of moral and punitive damages.

The five modalities of comprehensive reparation consolidated by the Inter-American Court in its consistent jurisprudence are: restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and



modalidades constituyen, conforme a la doctrina contemporánea, la estructura mínima a la que debe ajustarse cualquier reparación que pretenda satisfacer el estándar de reparación integral.

De particular relevancia para el caso Mayan Palace es la categoría autónoma del daño al proyecto de vida. La categoría se distingue del lucro cesante en que no se refiere al ingreso esperado, sino a la realización integral de la persona afectada según su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten razonablemente fijarse determinadas expectativas y acceder a ellas. Aplicada al caso Mayan Palace, la categoría justifica un componente reparatorio dirigido a los padres por la inviabilidad de la continuidad familiar — el hijo era hijo único — y por la pérdida de la asistencia previsible en la vejez.

El estándar de justa indemnización ha sido interpretado por la Corte Interamericana como exigencia de adecuación entre la magnitud del daño y el monto reparatorio, prohibición de la indemnización meramente simbólica y prohibición de los topes legales que impidan reparar adecuadamente. Estos tres elementos del estándar interamericano han sido recogidos, doce años después del fallo Mayan Palace, por la jurisprudencia 1a./J. 143/2024 de la Primera Sala mexicana, que declaró inconstitucionales los topes máximos a la cuantificación del daño moral.

En el plano universal, el referente principal es la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 16 de diciembre de 2005, titulada Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. La Resolución consagra cinco modalidades de reparación integral, y establece criterios mínimos de cuantificación que prefiguran la noción de reparación adecuada, efectiva y rápida.

guarantees of non-repetition. These five modalities constitute, under contemporary doctrine, the minimum structure to which any reparation must conform in order to satisfy the standard of comprehensive repair.

Of particular relevance to the Mayan Palace case is the autonomous category of damage to the life project. This category is distinguished from loss of earnings in that it does not refer to expected income, but to the full realization of the affected person according to their vocation, aptitudes, circumstances, potential, and aspirations, which reasonably allow them to set and pursue certain expectations. Applied to the Mayan Palace case, this category justifies a reparatory component directed at the parents for the impossibility of family continuity — the son was an only child — and for the loss of foreseeable support in old age.

The standard of just compensation has been interpreted by the Inter-American Court as requiring: adequacy between the magnitude of the harm and the reparatory amount; prohibition of merely symbolic compensation; and prohibition of statutory caps that prevent adequate reparation. These three elements of the inter-American standard were incorporated, twelve years after the Mayan Palace ruling, by binding precedent 1a./J. 143/2024 of the Mexican First Chamber, which declared unconstitutional the maximum caps on the quantification of moral damages.

At the universal level, the primary reference is UN General Assembly Resolution 60/147, adopted on December 16, 2005, entitled Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. The Resolution enshrines five modalities of comprehensive reparation and establishes minimum quantification criteria that prefigure the notion of adequate, effective, and prompt reparation.



Adicionalmente, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha emitido observaciones generales que orientan el desarrollo del derecho a la reparación en el plano universal. Se estableció que cuando proceda, la reparación puede entrañar la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como disculpas públicas, monumentos públicos, garantías de no repetición y cambios en las leyes y prácticas pertinentes, así como el sometimiento a la justicia de los autores de violaciones de derechos humanos.

Aunque el sistema universal no es directamente vinculante para los tribunales civiles mexicanos en casos como Mayan Palace, su valor interpretativo es relevante como reflejo de estándares internacionales y como manifestación del corpus iuris internacional de los derechos humanos al que se refiere la jurisprudencia mexicana contemporánea cuando interpreta el bloque de convencionalidad.

El marco legal mexicano aplicable a la valuación contemporánea del caso Mayan Palace se articula en la constitución, los tratados aplicables por convencionalidad, la legislación sustantiva civil vigente y la Ley General de Víctimas, completado por la jurisprudencia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su tercer párrafo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Establece adicionalmente que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

La cláusula de reparación integral derivada del último inciso de este párrafo opera, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 31/2017 — registro 2014098 —, como mandato constitucional aplicable también a las relaciones de derecho

Additionally, the Human Rights Committee of the International Covenant on Civil and Political Rights has issued general comments guiding the development of the right to reparation at the universal level. It has established that where appropriate, reparation may involve restitution, rehabilitation, and measures of satisfaction, such as public apologies, public memorials, guarantees of non-repetition, changes in relevant laws and practices, and the bringing to justice of the perpetrators of human rights violations.

Although the universal system is not directly binding on Mexican civil courts in cases such as Mayan Palace, its interpretive value is relevant as a reflection of international standards and as a manifestation of the international corpus iuris of human rights to which contemporary Mexican jurisprudence refers when interpreting the conventionality block.

The Mexican legal framework applicable to the contemporary valuation of the Mayan Palace case is articulated through the Constitution, applicable treaties by virtue of conventionality, current substantive civil legislation, and the General Victims Law, as completed by jurisprudence.

Article 1 of the Political Constitution of the United Mexican States establishes in its third paragraph that all authorities, within the scope of their competencies, have the obligation to promote, respect, protect, and guarantee human rights in accordance with the principles of universality, interdependence, indivisibility, and progressivity. It further establishes that the State must prevent, investigate, punish, and repair violations of human rights, in the terms established by law.

The comprehensive reparation clause derived from the final clause of this paragraph operates, pursuant to binding precedent 1a./J. 31/2017 — registry 2014098 —, as a constitutional mandate applicable also to private law relationships in which moral damages are claimed for acts



privado en que se reclama el daño moral por hechos imputables a particulares. Esto se conoce en la doctrina como eficacia horizontal de la reparación integral y constituye el fundamento más alto en el orden jurídico mexicano de la metodología contemporánea aplicable al caso Mayan Palace.

Por su parte, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos opera como complemento convencional vinculante del artículo 1° constitucional, conforme al criterio del bloque de constitucionalidad-convencionalidad consolidado por la propia Suprema Corte en sentencias como la contradicción de tesis 293/2011 y la jurisprudencia subsiguiente. El estándar de justa indemnización del 63.1, interpretado por la Corte Interamericana en los casos reseñados en la sección anterior, es directamente operativo para los tribunales mexicanos que conocen de daños morales.

En el plano del derecho sustantivo, los artículos clave aplicables al caso Mayan Palace son los artículos 1920, 1913, 1916, 1916 bis y 1917 del Código Civil para el Distrito Federal. Por su parte, la Ley General de Víctimas es el marco normativo federal que articula los principios y modalidades de la reparación integral en el sistema mexicano. Aunque su aplicación primaria es para víctimas del delito y víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades, su régimen ha sido invocado por analogía y por interpretación pro persona en casos de responsabilidad civil contra particulares cuando los hechos involucran violaciones a derechos fundamentales.

Los artículos clave para el caso Mayan Palace son el artículo 4, que reconoce a las víctimas indirectas como titulares de los derechos previstos en la ley; el artículo 26, que consagra el derecho a la reparación integral en términos de la jurisprudencia interamericana; el artículo 27, que detalla las cinco modalidades de reparación integral; el artículo 64, que enumera los conceptos compensatorios materiales reparables; y el artículo 73, que regula las

atributable to private parties. This is known in doctrine as the horizontal effect of comprehensive reparation and constitutes the highest basis in the Mexican legal order for the contemporary methodology applicable to the Mayan Palace case.

For its part, Article 63.1 of the American Convention on Human Rights operates as a binding conventional complement to Article 1 of the Constitution, pursuant to the constitutionality-conventionality block criterion consolidated by the Supreme Court itself in decisions such as the Contradiction of Theses 293/2011 and the subsequent jurisprudence. The just compensation standard of Article 63.1, as interpreted by the Inter-American Court in the cases reviewed in the preceding section, is directly operative for Mexican courts adjudicating moral damages.

At the level of substantive law, the key articles applicable to the Mayan Palace case are Articles 1920, 1913, 1916, 1916 bis, and 1917 of the Civil Code for the Federal District. The General Victims Law is the federal normative framework that articulates the principles and modalities of comprehensive reparation in the Mexican system. Although its primary application is to victims of crime and victims of human rights violations committed by authorities, its regime has been invoked by analogy and by pro persona interpretation in civil liability cases against private parties when the facts involve violations of fundamental rights.

The key articles for the Mayan Palace case are: Article 4, which recognizes indirect victims as holders of the rights provided in the law; Article 26, which enshrines the right to comprehensive reparation in terms of inter-American jurisprudence; Article 27, which details the five modalities of comprehensive reparation; Article 64, which enumerates the compensable material reparatory concepts; and Article 73, which regulates symbolic satisfaction measures and guarantees of non-repetition.



medidas de satisfacción simbólica y garantías de no repetición.

El marco legal vigente en 2014 era sustantivamente similar al actual en sus rasgos generales: la reforma constitucional de 2011 ya regía, el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal ya estaba vigente con su redacción actual, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ya era vinculante. Así, las diferencias relevantes son tres: el desarrollo jurisprudencial era todavía incipiente — la Primera Sala apenas iniciaba el camino que ha culminado en las once jurisprudencias reseñadas en la sección quinta —; la Ley General de Víctimas acababa de publicarse en enero de 2013 y no había alcanzado todavía consolidación interpretativa; y la doctrina académica nacional no había producido todavía las obras sistematizadoras que aparecen entre 2016 y 2025.

Estas tres diferencias explican que la sentencia de 2014 haya tenido necesariamente que abrir camino con criterios que la doctrina y la jurisprudencia posterior han depurado, expandido o corregido. La sentencia de 2014 fue, en sentido literal, una sentencia pionera.

The legal framework in force in 2014 was substantially similar to the current one in its general features: the 2011 constitutional reform was already in effect, Article 1916 of the Civil Code of the Federal District was already in force in its current wording, and the American Convention on Human Rights was already binding. Accordingly, the relevant differences are three: jurisprudential development was still incipient — the First Chamber was only beginning the path that has culminated in the eleven binding precedents reviewed in section five —; the General Victims Law had just been published in January 2013 and had not yet achieved interpretive consolidation; and national academic scholarship had not yet produced the systematizing works that appeared between 2016 and 2025.

These three differences explain why the 2014 judgment necessarily had to blaze a trail with criteria that subsequent doctrine and jurisprudence have refined, expanded, or corrected. The 2014 judgment was, in the literal sense, a pioneering decision.